

de trescientos diez y ocho pesos, como derechos causados por los efectos que introdujo á dicha población en los días 25 y 26 de Diciembre del año pasado, y con cuyo cobro se violan, en sentir del quejoso, las garantías que consigna el artículo 14 de la Constitución federal, por darse efecto retroactivo á la circular de 31 del mismo mes y año, en cumplimiento de la cual se exige á su referido hermano el pago de derechos.

Considerando: que el decreto del Estado de 23 de Abril de 1869, que concede una feria á Iguala desde el 21 al 28 de Diciembre de cada año, declara libres de derechos los efectos que para la feria se introdujeran en los días expresados; y que D. Manuel Cortina Barrio, usando de estas franquicias, introdujo á la misma población varios efectos en los días 25 y 26 de Diciembre del año pasado.

Considerando: que esta exención de derechos, no ha sido suspendida sino hasta el día 27 de Abril del presente año, por el decreto número 34 de la Legislatura del Estado; y por lo mismo, debe considerarse vigente en los días que introdujo Cortina Barrio sus efectos, el decreto que concedió la feria á Iguala y no el que suspendió esta concesión.

Con fundamento de los artículos 14, 101 y 102 de la Constitución federal, se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito, en 7 de Mayo del presente año; que declara: que la Justicia de la Unión ampara y protege á D. Manuel Cortina Barrio, contra el cobro que le hace el Recaudador de contribuciones de Iguala, de la cantidad de trescientos diez y ocho pesos por derechos de la carga de mercancías que introdujo á la Ciudad de Iguala en los días 25 y 26 de Diciembre del año pasado.

Devuélvase las actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; archivándose á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decreta-

ron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Aliguel Auzo.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José María Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Ignacio María Altamirano.*—*Simón Guzmán.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, 4 de Setiembre de 1874.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Puebla por el C. Manuel Lopez Martínez, contra los procedimientos del Ayuntamiento de Tecamachalco, que con violación de garantías constitucionales, lo ha destituido del cargo de Juez del Tribunal correccional de de la misma Villa.

PREMIENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal, en el juicio de amparo promovido por el C. Manuel Lopez Martínez, contra el Presidente del Ayuntamiento del Distrito de Tecamachalco, por haberlo destituido del cargo de Juez del Tribunal correccional de ese Distrito, en virtud de haberlo declarado culpable del delito de robo de algunas cantidades pertenecientes á la pensión de la Guardia nacional, supuesto su estado que es el de alegar, ante V. dice: que del informado por la autoridad responsable, aparece: que siendo el quejoso Juez correccional, con arreglo á la ley de la materia, se le destituyó de ese nombramiento, con el pretexto de que no podía desempeñarlo, por estársele instruyendo causa por defraudador de los caudales de la guardia nacional.

Hecho es este, que está desvanecido con las pruebas rendidas por el interesado; pero á ser cierto, habria sido necesario que se le juzgara y sentenciara por la Sala de sentencia respectiva, con arreglo á lo preceptuado en el artículo 55 de la ley orgánica de Tribunales. Así es que habiéndose faltado á esta prevencion, indudable es que el Presidente del Ayuntamiento de Tecamachalco ha conocido de un negocio de la competencia del poder judicial, y ha infringido en perjuicio del C. Manuel Lopez Martinez, los artículos constitucionales que invoca en su escrito de queja. Por lo mismo, el recurso interpuesto procede y debe otorgársele, á fin de que vuelva al goce de su empleo, y no se le siga molestando por la corporacion de que se ha hecho referencia.

Sírvase V. C. Juez, decretar en el sentido indicado, como se lo pide el suérito, con fundamento del artículo 19 de la ley de 20 de Enero de 1869.

Zaragoza, Abril 22 de 1874.—*E. Sanchez.*

Sentencia del O. Juez de Distrito.

Puebla, Mayo 28 de 1874.—Visto el presente juicio de amparo promovido por el C. Manuel Lopez Martinez, Juez del Tribunal correccional de Tecamachalco, contra el Presidente del Ayuntamiento de ese Distrito, por haberlo declarado culpable del robo de algunas cantidades del producto de la pension de guardia nacional, y acordado su destitucion: el escrito de queja; el informe producido; las pruebas rendidas; lo alegado; el parecer fiscal, y cuanto mas ha debido verse.

Considerando: que lo enve de fundamento al quejoso para solicitar el amparo de la Justicia federal, lo dispuesto por los artículos 14, 20 y 21 de la Constitucion, al violarse en su perjuicio las garantías que otorgan, con el hecho de haberlo declarado culpable del delito de robo y destituido del

cargo de Juez, la corporacion municipal.

Que del informe dado, aparece: que habiéndosele conferido el cargo de que ha hecho referencia, el C. Gefe político comunicó al Ayuntamiento, que no podia desempeñarlo, en razon de que se le estaba instruyendo causa por defraudador de los fondos de la pension de guardia nacional, y que por lo mismo tenia suspensos los derechos de ciudadano que exigen, tanto la ley de organizacion de Tribunales, como la Constitucion general y particular del Estado, para ser Juez, y ya por esto, como por que no habia hecho la protesta, se acordó su destitucion nombrándose á otra persona en su lugar.

Que por lo mismo, resulta confesado que el C. Manuel Lopez fué destituido de su empleo de Juez, teniéndosele por culpable en robo de caudales públicos, y por no haber protestado al desempeñar sus funciones.

Que de las constancias del expediente aparecen desvanecidos los cargos, é infundada la acusacion; mas aun suponiendo que fuesen ciertos los hechos, en el caso es fuera de duda que el Ayuntamiento ha conocido de negocio que no era de su competencia, y aplicado pena, cual es la destitucion, estando prevenido por el artículo 55 de la ley orgánica de Tribunales, que los funcionarios de la categoria del que se trata, por delito del orden comun deben ser enjuiciados por la Sala de sentencia, habiéndose por lo tanto faltado á lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitucion.

Que aun suponiendo la competencia del Ayuntamiento, en los términos que procedió, privó al reo de las garantías que otorga el artículo 20, pues de plano se le destituyó solo mediante un acuerdo y en vista de la comunicacion de la Gofatura; y que tambien ha vulnerádose el artículo 21 con la aplicacion de pena que solo debería aplicar la autoridad judicial.

Por estas consideraciones, de conformidad al parecer fiscal y con fundamento de lo prevenido por el artículo 19 de la ley re-

glamentaria, de los artículos 101 y 102 de la Constitución, se declara: que la Justicia de la Unión ampara y protege al C. Manuel Lopez Martinez, en virtud de haber sido destituido por el Ayuntamiento, del cargo que se le confirió, de Juez suplente del Tribunal correccional del Distrito de Tecamachalco. Hágase saber; publíquese esta resolución en la forma presente, y remítase el expediente á la Corte Suprema de Justicia para la revision, previa la reposición de esta hoja de papel con la del sellado que corresponde. El C. Juez de Distrito definitivamente juzgando, lo proveyó, mandó y firmó.—Antonio Rivero.—Ante mí.—Antonio García Mozqueira.

Es copia certificado. Puebla, Mayo 29 de 1874.—Antonio García Mozqueira, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Agosto 14 de 1874.—Visto el recurso de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Puebla, por el C. Manuel Lopez Martinez, contra los procedimientos del Ayuntamiento de Tecamachalco, que con violación de las garantías consignadas en los artículos 14, 20 y 21 de la Constitución federal, lo ha destituido del cargo de Juez del Tribunal correccional de la misma Villa, por estar acusado de haber defraudado los fondos de la pensión de Guardia nacional, en el tiempo en que desempeñaba un empleo en la Gefatura política. Visto el informe de la autoridad; lo alegado por el quejoso; el parecer fiscal, con cuanto mas se tuvo presente y ver convino; y

Considerando: que el Ayuntamiento de Tecamachalco, como autoridad administrativa, aun cuando hubiera podido, en caso de permitirlo las leyes del Estado, separar de su cargo al C. Lopez Martinez como un empleado de su nombramiento, no ha tenido facultad para imponerle como pena la des-

titucion del mismo cargo, por no ser esta pena de las que la Constitución federal, por su artículo 21, permite imponer por las autoridades administrativas.

Considerando: que tampoco ha podido el mismo Ayuntamiento imponer la expresada pena con el carácter de jurado de hecho que le confiere las leyes del Estado, para conocer de los delitos cometidos por los jueces de los Tribunales correccionales en el desempeño de sus funciones, tanto por que el delito de que se acusa á Lopez Martinez no es de esta clase, pues se supone cometido con anterioridad al tiempo en que fué nombrado Juez del Tribunal correccional, cuanto por que como jurado de hecho, debió haberse limitado á declararlo culpable, en caso de haber méritos para ello, y no estenderse hasta señalarle pena, con infracción de las leyes del Estado y del artículo 14 de la Constitución.

Considerando: que por otra parte, la pena de destitucion se le impuso á Lopez Martinez de plano y sin forma alguna de juicio, con violación de las garantías que establece el artículo 20 de la Constitución, en favor de todo acusado.

Considerando: que si bien la autoridad ejecutora del acto reclamado manifiesta en su informe, que una de las causas que motivaron la destitucion del quejoso, fué no haber prestado la protesta de guardar y hacer guardar la Constitución y las adiciones y reformas que se le hubieron hecho; consta por las pruebas rendidas en este recurso, entre las cuales obran las actas de las sesiones del Ayuntamiento, que no se tuvo presente tal motivo para separar de su empleo á Lopez Martinez, y que este no se ha negado á prestar la mencionada protesta.

Por tales consideraciones, y con fundamento de los artículos 14, 20, 21, 101 y 102 de la Constitución federal, se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito en 28 de Mayo del presente año, que declara: que la Justicia de la Unión ampara

y protege al C. Manuel Lopez Martinez, contra los procedimientos del Ayuntamiento de Tecamachalco, en virtud de los cuales fué destituido del cargo de Juez suplente del Tribunal correccional de la misma Villa.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Terc.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*M. Aza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio Altamirano.*—*S. Guzman.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Setiembre 18 de 1874.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Michoacan por María Asuncion Gonzalez á nombre de su hijo Francisco Alvarado, contra el Prefecto político de Morelia, por violacion de garantías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

Con fecha 27 del próximo pasado se presentó ante este juzgado María Asuncion Gonzalez, madre de José Francisco Alvarado, exponiendo: que hacia ocho dias habia sido aprehendido su hijo en el pueblo de Tacicuaro por orden de esta Prefectura y puesto en la cárcel por sospechas de plagio; que despues fué consignado al servicio de las armas, sin que se le hubiera admitido por estar inutilizado; que con estos procedimientos cree la quejosa violadas en la

TOMO VI.—PARTE II.

persona de su hijo, las garantías que otorga la Constitución federal en sus arts. 16, 18 y 19; y por lo mismo pide se decrete en su favor el amparo que solicita de la Justicia federal.

Dado á este escrito el tesoro de ley, informó el C. Prefecto que efectivamente, un piquete de policía aprehendió en Tacicuaro como sospechoso al citado Alvarado, y que habiéndose conocido que pertenecía al ejército, se consignó á la Mayoría de C. d. nos, lo que lo devolvió á la Prefectura por encontrarse ya inútil para el servicio de las armas. Que en los dias en que esto pasaba fué denunciado el quejoso como ladrón de camino real, por lo que lo estaba juzgando con arreglo á la ley de 3 de Mayo anterior. A este informe no se acompaña constancia alguna.

Obligado el que suscribe á pedir sobre lo principal, conforme á la segunda parte del art. 9º de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869, y dando el caso por comprendido en la fraccion 1ª de su art. 1º, exponer que teniendo el informe del C. Prefecto el carácter de oficial, debe estarse á él mientras no haya comprobantes que lo desvirtúen, por lo que el fiscal, á reserva de reformar su opinion, pide por ahora que se decrete no haber lugar al amparo solicitado, por estar funcionando el C. Prefecto dentro de la órbita de sus facultades que le señala la ley de 3 de Mayo citada en su informe, sin hacer condenacion en la multa por la notoria insolvencia de la parte quejosa.

Morelia Diciembre 8 de 1873.

Es copia que certifico. Morelia, Diciembre 20 de 1873.—*Isidro Alemán*.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Morelia, Diciembre 16 de 1873.—Visto este juicio de amparo promovido por María Asuncion Gonzalez á nombre de su hijo Francisco Alvarado, contra el C. Prefecto de esta Capital, por creer violadas en la per-